

De la Prisión Central de San Miguel de los Reyes (Valencia): Alvaro Gallinal Cuera, Ricardo de la Torre García, Eugenio Macías Gigante, Salvador Manclús Andrés, Eduardo Martínez Campos y Vicente Díaz Muñoz.

De la Prisión Provincial de Badajoz: Eladio Román Morgado.

De la Prisión Celular de Barcelona: Jaime Marrase Gaspert, Helodoro Díez Álvarez y José Díez Vidal.

De la Prisión Provincial de Burgos: Domingo Bartolomé Díez. De la Prisión Provincial de Cádiz: Juan Pérez Doval, Francisco Olmo Pinto y Serafín García Hernández.

De la Prisión Provincial de Córdoba: Matías Simón Ramírez, Francisco Sánchez Vallejo, Rafael Pinto Garduño, Alfonso Martín Rodríguez y Rafael Simón Santos.

De la Prisión Provincial de Granada: José Martínez Tallón.

De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid: Urbano Esteban Pelón, Silvestre Cabrera Sánchez, Esteban Larraide Echevarría, Julián Laquidain Aróstegui, Francisco Izquierdo Rodríguez, Ansel Valls Martínez, Antonio Moreno Fernández, José Luis Iranzo Montequedo, Rafael García Martínez, José Antonio Sánchez García, Mario Cura Pajares, Jesús Gómez Bellido y Alejo Montoya Nicolás.

De la Prisión Provincial de Málaga: Ramón Sánchez Meca.

De la Prisión Provincial de Oviedo: María Oliva González Prendes y Ercilio Salvador Rodríguez.

De la Prisión Provincial de Palencia: Tomás Montero Terriorio.

De la Prisión Provincial de Las Palmas: Antonio Rojas Medina, Isabel Ramírez Enriquez, Juan Vera Gómez, Agustín García Robaina, Julián Gasano Nieto y Miguel Santana de la Nuez.

De la Prisión Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Sinai Monasterio González y Benigno Morán Morales.

De la Prisión Provincial de Santander: Josefa Piedad González Sánchez.

De la Prisión Celular de Valencia: Daniel Gómez García, Cándido Terrón Santander, Manuel Ramón Martínez, Juan Vicente Asensio Cervera y Rafael de la Hoz Ovejero.

De la Prisión Provincial de Vitoria: Juan Antonio Blanco Cerrada.

Del Destacamento Penitenciario del Pantano de Guara, Aguas (Huesca): Daniel Mora Beñoña y José Ramón Grandá Pérez.

De la Colonia Agrícola Penitenciaria de Herrera de la Mancha (Ciudad Real): José Sirvent Armijo y Mariano González Poveda.

Del Destacamento Penal de El Puig de Santa María (Valencia): Patricio Vallina Portillo y Miguel Pellicer Pellicer.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 23 de julio de 1963.

ITURMENDI

Ilmo. Sr. Director general de Prisiones.

ORDENES de 9 de agosto de 1963 por las que se concede la libertad condicional a los penados que se citan.

Ilmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la aplicación del beneficio de libertad condicional establecido en los artículos 98 al 100 del vigente Código Penal y Reglamento de los Servicios de Prisiones aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956; a propuesta del Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de las Penas por el Trabajo y previo acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión de esta fecha.

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido a bien conceder el beneficio de libertad condicional a los siguientes penados:

De los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares: Rafael Tabares Corredera, Nicolás García Díaz.

Del Reformatorio de Adultos de Alicante: Francisco Nicolás Cayetano Jesús López Lorente.

De la Prisión Central de Burgos: Juan Ferrán Samper, Mariano Fernández Romero.

Del Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario de Madrid: Basilia Fernández García.

Del Centro Antituberculoso Penitenciario de Guadalajara: Regino González Moro.

Del Instituto Geriátrico Penitenciario de Málaga: Mariano Rufino Delgado Carrión, Francisco Álvarez Rodríguez.

De la Prisión Central del Puerto de Santa María (Cádiz): Eduardo Faut Rovira.

De la Prisión Provincial de Cádiz: Manuel Navarro Menéndez.

De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid: Cesáreo Crespo Izquierdo, Sabino Echaburu Artizabalaga, Enrique Pazos Tamayo, Salvador Miguel Nicolás, Eustaquio Narvaiza Azpitarte, Victorino Castro Calleja.

De la Prisión Provincial de Tarragona: Ramón García Gómez.

De la Prisión Preventiva de Jerez de la Frontera (Cádiz): Encarnación Ruiz Ruso.

Del Destacamento Penal de El Puig de Santa María (Valencia): Aristides Rafael Nebot Concepción.

De la Colonia Penitenciaria de Nanclores de la Oca (Alava): José Luis Beceiro Ballester.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años. San Sebastián, 9 de agosto de 1963

ITURMENDI

Ilmo. Sr. Director general de Prisiones.

Ilmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la aplicación del beneficio de libertad condicional establecido en los artículos 98 al 100 del vigente Código Penal y Reglamento de los Servicios de Prisiones aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956; a propuesta del Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de las Penas por el Trabajo y previo acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión de esta fecha.

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido a bien conceder el beneficio de libertad condicional a los siguientes penados:

Del Reformatorio de Adultos de Alicante: Luis José Serrano Menéndez, Eugenio Brazuelo Brazuelo, Antonio Rodríguez Valverde.

De la Prisión Central de Burgos: Ramón López Barronechea, Nicolás Fernández Alonso, Demetrio Pouso Álvarez.

De la Prisión Central de Puerto de Santa María (Cádiz): Vicente Yela Herreros, Enrique Llopis Abat, Miguel Giner Iborra.

De la Prisión Provincial de Badajoz: Pedro Sánchez Sosa.

De la Prisión Provincial de Bilbao: Ricardo Fernández González, Victoria Ortiz Martín, Francisco Javier Garrido Lázaro.

De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid: José Durán de la Rosa, José López Escoda.

De la Prisión Provincial de Oviedo: José María Antonio Llavona Márquez.

De la Colonia Penitenciaria de Nanclores de la Oca (Alava): Francisco Javier Segurocha Anchia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años. San Sebastián, 9 de agosto de 1963.

ITURMENDI

Ilmo. Sr. Director general de Prisiones.

Ilmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la aplicación del beneficio de libertad condicional establecido en los artículos 98 al 100 del vigente Código Penal y Reglamento de los Servicios de Prisiones aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956; a propuesta del Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de las Penas por el Trabajo y previo acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de esta fecha.

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido a bien conceder el beneficio de libertad condicional a los siguientes penados:

Del Reformatorio de Adultos de Alicante: Juan Moreno Hidalgo, Emilio Peña Cazorla y Francisco Morales López.

De la Prisión Central de Burgos: Antonio Casas Cazorla y Antonio Sanz Perfontán.

Del Instituto Geriátrico Penitenciario de Málaga: Saturnino Anastasio Carrasco Muñoz.

Del Reformatorio de Adultos de Ocaña (Toledo): José Antonio Trueba Fernández, Francisco Sánchez Lucena, José Luis Puche Soto, Ángel Méndez de Haro, Manuel Alfonso Morales Serrano, Rafael Balaguer Jiménez, Tomás Egido Garduño, Jaime Castro Valiño, José García Domínguez, Luis González Peribañez, Antonio Grau Cano, Sebastián Jiménez Jiménez y Félix Lucas Grimaldos.

De la Prisión Central de Puerto de Santa María (Cádiz): Rafael Rivas Fernández, Manuel Iglesias Díaz, Antonio Acosta Fontcuberta, Juan Rodríguez Santana y Juan Manuel Reyes Casañeda.

De la Prisión Central de San Miguel de los Reyes (Valencia): Evaristo Ivars Simo Saturnino Vázquez Chenlo, Isidro Bautista López, Félix Martínez Valero, Salvador Pastor Fernández y Miguel Blaya Gabarrón.

De la Prisión Celular de Barcelona: Onofre Peñalver Castañón, Eduardo Rubio Fernández, Ramón Carreras Valdés, Enrique Sebastián Vergé y Luis Sierra Samper.

De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid: Rafael Barba Arráez, José Miguel Montenegro Sánchez, Enrique Xaudaró Rodoreda y Emilio Morellón Tordesillas.

De la Prisión Provincial de Málaga: Francisco Trujillo Godoy.

De la Prisión Provincial de Mujeres de Valencia: Laura Aranda Villanueva.

Del Destacamento Penal de Castillejo: Francisco Jódar Fernández.

Del Destacamento Penal de Caurel (Lugo): Manuel López Castro.

Del Destacamento Penal de Castillejo (Toledo): Juan Antonio Rodríguez Martín.

Del Destacamento Penal de El Puig de Santa María (Valencia): Manuel Lorenzo Sala.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
San Sebastián, 9 de agosto de 1963.

ITURMENDI

Ilmo. Sr. Director General de Prisiones.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 18 de septiembre de 1963 por la que se interpreta y aclara la de 13 de diciembre de 1962 que declara aplicable la exención del Impuesto de Derechos Reales, establecida en los Convenios entre España y los Estados Unidos de América de 26 de septiembre de 1953, a determinados contratos de suministro que otorgue la RENFE.

Ilmo. Sr.: La Orden de este Ministerio de 13 de diciembre de 1962 considera aplicable la exención prevista en el artículo III, apartado 3, del Convenio relativo a la ayuda para la mutua defensa entre España y los Estados Unidos de América de 26 de septiembre de 1953, a los contratos de suministro que otorgue la RENFE, en ejecución del plan aprobado por el Gobierno para el mejoramiento de su material e instalaciones, siempre que se justifique que su precio se satisface precisamente con cargo a la ayuda económica americana, prevista en dicho precepto.

Se ha suscitado la duda de si en la alusión a los contratos de suministro pueden considerarse incluidas las figuras contractuales previstas y reguladas en la legislación del Impuesto de Derechos Reales como variación de aquellos —contratos mixtos de suministro y de ejecución de obras o de suministro con prestación de servicios, y de ejecución de obras simplemente— que se utilicen por la RENFE para el desarrollo y ejecución del plan de que se trata. La resolución de la dificultad mediante la procedente interpretación, no puede ser sino afirmativa, teniendo en cuenta, de una parte, la finalidad que se persigue, en la que es indiferente la naturaleza jurídica que revista la transmisión que se efectúe o el servicio que se preste, y de otra, que la Orden que se interpreta no es sino aplicación a casos concretos, con simplificación de trámites y procedimiento, de una exención establecida ya con carácter general en el Convenio antes citado.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

Se consideran incluidos en el supuesto objeto de la Orden de este Ministerio de 13 de diciembre de 1962, no solo los contratos de suministro propiamente dicho, sino también los contratos mixtos de suministro y de ejecución de obras, o de suministro con prestación de servicios, y de ejecución de obras, e incluso, en cuanto sea menester, las compra-ventas de bienes muebles, que se otorguen por la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, en ejecución del plan aprobado por el Gobierno para el mejoramiento de su material e instalaciones, siempre que se justifique que su precio se satisface precisamente con cargo a la ayuda económica americana.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de septiembre de 1963.—P. D., Juan Sánchez-Cortés.

Ilmo. Sr. Director general de lo Contencioso del Estado

ORDEN de 31 de octubre de 1963 por la que se concede habilitación aduanera del muelle de la factoría que la entidad «Afonos Sevilla, S. A.», posee en Tablada, Canal de Alfonso XIII, del puerto de Sevilla

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por la firma «Afonos Sevilla, S. A.», con domicilio en Madrid, y fabrica en Sevilla, solicitando habilitación de un muelle en su factoría de Tablada, en la margen derecha del Canal de Alfonso XIII, del puerto de Sevilla para la realización de determinadas operaciones aduaneras:

Resultando que los informes recibidos del ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda de la provincia de Sevilla, del señor Administrador principal de la Aduana de Sevilla, Comandancia de la Guardia Civil, Junta de Obras del Puerto de Sevilla, Auto-

ridad de Marina, así como de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, emitidos de conformidad con el artículo 3.º de las vigentes Ordenanzas de Aduanas, son favorables a la concesión de lo solicitado:

Resultando que en el informe de dicha Aduana de Sevilla se hace constar que puede accederse a dicha habilitación, siempre que se establezca un puesto del resguardo para ejercer las funciones de vigilancia y confronta, así como que por los interesados se faciliten los medios necesarios y adecuados para la práctica de los despachos;

Resultando que el informe de la Comandancia de la Guardia Civil manifiesta que para acceder a lo solicitado habrían de ser construidas las casetas necesarias para resguardo de las fuerz que presten los servicios de vigilancia;

Considerando que las razones alegadas por el interesado son atendibles y que de los informes recibidos de las distintas autoridades de la provincia se deduce que la habilitación solicitada ha de favorecer el desarrollo de la industria de que se trata, sin perjuicio para los derechos del Tesoro, con tal que se cumplan las condiciones exigidas.

Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por V. I., ha acordado habilitar el muelle de la factoría de «Afonos Sevilla, S. A.», situada en Tablada, dentro de la margen derecha del Canal de Alfonso XIII, del puerto de Sevilla, para la realización de las siguientes operaciones aduaneras:

- 1.º Carga, en exportación y cabotaje, de primeras materias de su industria.
- 2.º Carga, en ambos regimenes, de productos fabricados por su industria.
- 3.º Descarga, en importación y cabotaje de primeras materias para su industria.
- 4.º Descarga, en ambos regimenes, de materias auxiliares y de elementos para el funcionamiento de su factoría.
- 5.º Descarga, en dichos regimenes, de maquinaria necesaria para la instalación, conservación y reparación de la factoría.

Las referidas operaciones se realizarán con intervención y documentación de la Aduana de Sevilla, siendo indispensable la previa existencia o creación del correspondiente puesto del resguardo para ejercer las funciones de vigilancia y confronta, así como por la Empresa solicitante se construyan las casetas necesarias a las fuerzas que presten vigilancia, y siendo de cuenta de los interesados el abono de los gastos de locomoción que reglamentariamente puedan devengarse.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 31 de octubre de 1963.—P. D., Juan Sánchez-Cortés.

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.

CORRECCION de erratas de la Orden de 8 de octubre de 1963 por la que se toma en consideración la solicitud de Convenio formulada por el Subgrupo de Bisutería del Sindicato Nacional del Metal para el pago de los Impuestos sobre Lujo que gravan la bisutería ordinaria por el apartado b) del epígrafe siete de las plantas tarjetas durante 1963.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 263 de fecha 2 de noviembre de 1963, página 15557, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la disposición tercera de la citada Orden, donde dice: «... don Antonio Gomila Gomila Sirerol...», debe decir: «... don Antonio Gomila Sirerol...».

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando y Depuración de Barcelona por la que se hace público el fallo que se cita

Por la presente se pone en conocimiento de Antonio Carrascosa Pérez, que tuvo su último domicilio conocido en esta capital, calle Agla, número 6, principal segunda, y en el que ha resultado desconocido, que la Comisión Permanente de este Tribunal, en sesión del día 30 de octubre último y al conocer el expediente de contrabando número 537.1963, instruido con motivo de aprehensión de tabaco, dictó el siguiente acuerdo:

- 1.º Declarar cometida una infracción de contrabando comprendida en el caso segundo y tercero 1.º del artículo 7.º de la Ley de 11 de septiembre de 1953 y considerada de menor cuantía.
- 2.º Declarar responsable de la misma en concepto de autor a Antonio Carrascosa Pérez.
- 3.º Declarar que se estima concurre la atenuante tercera del artículo 14.
- 4.º Imponer a Antonio Carrascosa Pérez una multa de nueve mil seiscientos pesetas (9.600 pesetas), equivalente al límite mínimo del grado inferior y, en caso de insolvencia, la correspondiente sanción de prisión.